

POR ANAHÍ DURAND GUEVARA

ESTUDIANTE DE LA MAESTRÍA EN CIENCIAS SOCIALES DE LA FLACSO, MÉXICO.

Han pasado cerca de veinte años desde que el APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana), el partido más antiguo y consolidado del frágil sistema político peruano, llegó a la presidencia por primera vez. Era la oportunidad del aprismo de cumplir sus promesas fundacionales como proyecto reformista y popular que le valió sucesivas proscipciones por parte de la elite política peruana. Corría 1985 y un joven Alan García juramentaba como presidente en medio del mayoritario respaldo de un país que se orientaba a la izquierda¹. Nada hacía pensar entonces que el saldo de cinco años de gobierno aprista sería tan altamente negativo: hiper inflación, guerra interna, escasez de alimentos, quiebre de empresas públicas, son algunos de los hechos que destacan. Se han esbozado diversos argumentos que expliquen este fracaso y aluden desde el ímpetu juvenil del presidente hasta una lectura equivocada del escenario internacional, pues mientras Latinoamérica viraba al consenso de Washington, García insistía en el modelo de sustitución de importaciones. Mas allá de los balances del primer gobierno aprista², lo cierto es que los desastrosos resultados de la gestión García facilitaron el ascenso del fujimorismo y el quiebre de la democracia en 1992, exacerbando en la ciudadanía un sentimiento antipartido favorable a las salidas autoritarias.

No obstante, cuando el APRA parecía anulado como posibilidad política exitosa, la vuelta de García al Perú el 2001 demostró justamente lo contrario. La permanencia de la crisis de los partidos políticos, la fragmentación de las agrupaciones que lideraron la oposición a Fujimori y la habilidad de García para reinventarse, son algunos de los factores que permitieron un rápido posicionamiento del APRA perdiendo solo frente a Alejandro Toledo. Las últimas elecciones del 2006 fueron más sorprendentes aún; cuando todos daban por segura una segunda vuelta entre la socialcristiana Lourdes Flores y el Partido Nacionalista liderado por Ollanta Humala, Alan García ganó las elecciones presidenciales.

El APRA ha vuelto al poder con un discurso mucho más conservador en materia económica y poco crítico frente al legado autoritario fujimorista. Pero los esfuerzos de García por brindar una imagen de responsabilidad que asegure un país gobernable y seguro a la inversión extranjera, deben lidiar con los altos índices de pobreza y las demandas de redistribución de la voceada mejora económica experimentada

¹ En las elecciones de 1985 los partidos que alcanzaron las votaciones mas altas fueron el APRA y el Frente Electoral Izquierda Unida (IU) Para ver los resultados a detalle ver cifras en www.onpe.gob.pe

² Para un análisis detallado del gobierno aprista 1985 puede leerse a Bonilla Heraclio *El Apra de la ideología a la praxis*, Instituto de Estudios Peruanos (IEP) Lima 1992 y Lopez-Chau, Alfonso , *Los laberintos de la crisis: dos años de gobierno aprista*, Lima, CONCYTEC , 1988.

por el Perú durante el gobierno de Toledo. Más aun el nuevo gobierno de García, quien se declaró desde un inicio aliado de la administración Bush, debe lidiar con la fuerte influencia de los gobiernos progresistas en la región, particularmente en Bolivia y Ecuador bastante cercanos al Perú y referentes importantes de las organizaciones sociales en las movilizaciones y protestas.

Transcurridos los primeros 6 meses de su gobierno, es importante preguntarse cómo viene enfrentando Alan García y el APRA en general, el desafío de su segunda gestión, en términos de la agenda prioritaria y la relación establecida con las otras fuerzas políticas. El análisis de estos puntos, tras una breve reseña de la trayectoria del APRA como organización política, espera brindar pistas sobre la incidencia que las decisiones del gobierno aprista pueden tener en la consolidación de la democracia en la sociedad peruana, donde siempre parecieran estar latentes las salidas violentas y autoritarias. Todo esto a la luz de un escenario regional andino claramente orientado a la izquierda contrario a la actual postura peruana, lo cual como ocurrió con el contexto internacional conservador a fines de la década del 80, puede volver a jugarle en contra al reelecto presidente García.

El APRA como partido

El APRA se origina como partido la primera década del siglo XX, en un momento en que la vida política nacional era aun privilegio de la oligarquía. A la luz de las ideologías que recorrían el mundo en ese entonces, pensadores como José Carlos Mariátegui por un lado y Haya de la Torre por otro, plantearon sus propuestas políticas sobre transformación de la sociedad peruana. El compromiso de Víctor Raúl Haya de La Torre con la lucha obrera y su ascendente como dirigente universitario, lo colocaron como uno de los principales líderes de una nueva generación política. En esta etapa fundacional el APRA adquirió un carácter insurreccional marcado por el destierro de Haya durante el gobierno de Augusto B. Leguía. Es desde su exilio mexicano que Haya de La Torre funda la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) en 1924. Rápidamente, el APRA desplazó al Partido Socialista fundado por Mariátegui, canalizando las demandas populares y posicionándose como el partido de masas más importante del Perú en el siglo XX. No obstante, la historia partidaria del aprismo ha estado siempre signada por vaivenes y posturas que pueden ayudarnos a entender la dinámica y discurso de su actual gobierno.

Siguiendo lo mencionado sobre las funciones que cumplen los partidos políticos a lo largo de su ciclo de vida³, en su etapa inicial hasta aproximadamente mediados de la década del 40, el APRA cumple una función integrativa – expresiva, conteniendo exigencias generales que demandaban la transformación del orden político. Para ello, la organización combina exitosamente la lucha por objetivos específicos junto a aspiraciones generales, cumpliendo la ideología un rol fundamental como elemento cohesionador, y justificando el sacrificio de fines inmediatos por objetivos finales. En esta primera etapa se sucedieron hechos fundacionales que marcaron la identidad aprista en torno al sacrificio y la entrega partidaria, tales como la rebelión de Trujillo y los fusilamientos de Chan Chan⁴, hitos en la memoria del martirologio y la

³ _____ Grompone Romeo *La tarea de los partidos y los desafíos de la política*, en “Instituciones Políticas y sociedad, lecturas introductorias” Grompone editor, Instituto de Estudios Peruanos, Lima 1995

⁴ _____ La rebelión de Trujillo alude a los hechos ocurridos en esa ciudad el 07 de Julio de 1932 en que militantes apristas

persecución. En estos primeros años también, Haya de La Torre publicó importantes textos de doctrina, sentando una postura anti imperialista e “indo americana” en oposición a las corrientes comunistas de la época.

Un segundo momento en la historia del APRA puede ubicarse en 1945 en que el Partido participa del Frente Democrático Nacional, espacio político conformado por el APRA y grupos de derecha, incluida la Unión Revolucionaria de Sánchez Cerro, que llevó a la presidencia a José Luis Bustamante y Rivero. En esta etapa el Partido abandona sus posturas antiimperialistas y antioligárquicas, publicando Haya de la Torre su tesis del “espacio tiempo histórico” como argumentación ideológica justificatoria del nuevo viraje político.⁵ Durante este periodo, el Partido cumple una función de incorporación y promoción de la participación ciudadana en la vida política siguiendo para ello una estrategia de “adecuación cuestionada” que muchos consideran una traición a sus objetivos fundacionales. No obstante, es la presión de los mismos actores sociales por ingresar al sistema político legal lo que hace ceder a la derecha, incorporando al APRA y aceptando su importancia política. El peso indiscutible de Haya de La Torre como jefe y su retorno al Perú terminan por zanjar las divergencias internas, consolidándose como un partido nacional, pese a las rupturas izquierdistas de los años 60 en protesta por la convivencia entre el APRA y el gobierno de Manuel Prado, entre cuyas disidencias destaca la de Luis de la Puente Uceda, fundador del APRA Rebelde primero y del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) después.

Un tercer momento en la historia del APRA, tiene que ver con la participación en elecciones libres a partir de 1980, hecho que marca la institucionalización del partido, cumpliendo una función orientada a representar y sumar intereses, ensayando diversas formas de acercarse a una sociedad cada vez menos politizada, mas mediática y desideologizada. En esta fase, la doctrina cohesiona pero no asegura la adhesión de nuevos militantes, por lo que el Partido busca incluir nuevos sectores de la sociedad, alguno de ellos emergentes dadas las nuevas condiciones de la economía y las reformas estructurales. Un ejemplo claro de esto, se vio en la última campaña electoral del 2006, en la cual el APRA se acerca a los sectores que han experimentado las restricciones de derechos conquistados, planteando propuestas favorables a los trabajadores contratados por las *services* o a los que deben trabajar mas de ocho horas sin recibir remuneración adicional por la realización de sobretiempos.

Si bien lo detallado hasta aquí sobre la historia Aprista revela cambios sucesivos y abruptos virajes político ideológicos, hay una constante de pragmatismo que se hace mas latente al superar la etapa fundacional en la que era indispensable mantener una cohesión interna. Debe reconocerse también como una constante en la historia partidaria, el haberse podido manejar exitosamente en base a un líder carismático: Haya primero y García hoy, han sido centrales en la historia partidaria. Finalmente, vale reconocer en la historia partidaria los cambios que han sufrido la agenda histórica del APRA y el

se alzaron en armas contra la dictadura de Sánchez Cerro. Los apristas liderados por Manuel “Búfalo” Barreto asaltaron el cuartel O’ Donovan, al tiempo que la población se sumó a la revuelta en numerosas movilizaciones por la ciudad. Finalmente las tropas llegadas de Lima logran sofocar la rebelión y el miércoles 13 de julio la Corte Marcial de Trujillo fusila cientos de apristas en las ruinas de Chan Chan. www.apra.org.pe

⁵ Luna Vegas Ricardo, *Contribución a la verdadera del APRA 1923-1988*, Editorial Horizonte, Lima 1990.

proyecto antiimperialista, continental y nacionalista de sus años fundacionales. ¿Qué prioriza la agenda aprista en este segundo gobierno y por qué?

LA AGENDA APRISTA ¿HACIA DONDE?

Durante las últimas elecciones presidenciales, el “cambio responsable” fue la principal consigna política levantada por el APRA. Contra los devaneos populistas de Ollanta Humala, García proyectó una imagen de mesurado estadista, que de volver al gobierno priorizaría dos grandes ejes: justicia social a partir de la regulación de los servicios públicos e impulso al agro en la región andina, zona donde se concentran las cifras más alarmantes de pobreza y la mayor intensidad de conflictos sociales. Respecto a temas importantes como la continuidad de la política económica neoliberal y la renegociación de las privatizaciones – en su mayoría efectuadas durante el régimen fujimorista-, García guardó un ambiguo silencio. Había que emitir señales de responsabilidad a los sectores empresariales y a los organismos internacionales, con quienes tan mala relación sostuvo en su primer gobierno. Finalmente, los empresarios y la comunidad internacional optaron por creer a García y otorgaron al APRA la segunda oportunidad que -dicen los enamorados- todos nos merecemos. Desde las mayorías populares, principalmente en Lima y las ciudades de la costa, García también obtuvo la segunda oportunidad que demandaba. Ante la improvisación del partido de Humala, la agenda responsablemente redistributiva anunciada por el APRA pareció ser la alternativa más sensata.

No obstante, a más de seis meses de gobierno Aprista, la agenda sentada por el gobierno aprista, ha sido fiel con sus promesas de mesura pero tiene muy poco de redistributiva. Los dos puntos colocados por el APRA que han monopolizado la agenda política podrían parecer disímiles y poco coherentes: el primero la pena de muerte para delitos de terrorismo, el segundo, la firma del TLC con Estados Unidos. No obstante, ambos puntos no son incoherentes entre sí, por el contrario, guardan estrecha relación con las actuales relaciones y alianzas priorizadas por el APRA. En lo internacional el claro respaldo a la administración Bush. En lo nacional, el compromiso con la continuidad de la política económica y social implementada por los sectores de derecha que se erigieron como hegemónicos luego del conflicto armado interno, en pleno auge neoliberal fujimorista.

Respecto a la pena de muerte, todo comenzó con el anuncio de campaña de promulgar la pena de muerte para los violadores de niños. Ya en el gobierno, de pronto y sin ningún hecho alarmante que lo sustentara, la propuesta de García se hizo extensiva a los delitos de terrorismo. Dada la existencia de tratados internacionales que impiden la aplicación de la pena de muerte a los países de la región que los suscriben, el gobierno exigió también revisar la adhesión peruana al Pacto de San José y la Corte Interamericana. ¿Por qué levantar este punto de agenda y re avivar el fantasma del terrorismo si hace mucho el Perú no es un país amenazado por la subversión? Para responder esto, debe partirse de reconocer el profundo impacto que han dejado en el Perú 20 años de conflicto armado interno y el modo en que se viene desarrollando el proceso de “verdad y justicia”.

La etapa de violencia política que vivió el Perú entre 1980 y el 2000, dejó al descubierto las profundas fracturas étnicas, políticas y de clase que atraviesa la sociedad peruana. La devastación de comunidades andinas en la sierra sur o el arrasamiento en la selva central, en manos de las fuerzas armadas y Sendero Luminoso, significaron miles de peruanos asesinados, desaparecidos, presos o torturados. El elemento común de la gran mayoría de afectados por la violencia fue su situación de pobreza y exclusión. A diferencia de otros procesos de violencia en Latinoamérica, Sendero Luminoso fue una guerrilla atípica, que dada su ideología maoísta ultra ideologizada, no dudó en enfrentar a la población civil desatando niveles de violencia nunca vistos en el S.XX. Desde el Estado, la respuesta sí fue similar a la de los otros países latinoamericanos: guerra de baja intensidad acompañada de la formación de grupos civiles armados (“Comités de Autodefensa”) que combatieron junto al ejército. El resultado final fue el enfrentamiento entre comunidades y el posicionamiento exitoso del autoritarismo fujimorista, como única garantía de orden y paz. La creación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación durante el gobierno de Transición en el 2001, reveló las cifras oficiales del conflicto⁶ pero no significó un cambio en la política oficial de derechos humanos.

Mientras los delitos cometidos por las organizaciones subversivas han sido largamente penalizados, han sido escasos los avances por esclarecer las violaciones a los derechos humanos, cometidas por las fuerzas armadas y policiales en cumplimiento a las políticas contra subversivas de los gobiernos de turno. Un caso emblemático son las ejecuciones extrajudiciales de 300 presos ocurridos en 1986 durante el primer gobierno Aprista, que compromete directamente en la línea de mando al presidente García y al vicepresidente Luis Gianpietri. Es el caso también de los operativos implementados por el “Comando Rodrigo Franco”, fuerza paramilitar vinculada al gobierno aprista acusada de asesinar a importantes líderes sindicales a fines de los 80. Ante las denuncias de las víctimas, se abrieron investigaciones judiciales que concluyeron rápida e intempestivamente consagrando la impunidad para los políticos y funcionarios apristas implicados. Es por ello que actualmente los casos se ventilan en instancias internacionales; más precisamente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Justamente la instancia a la que hoy García quiere que el Perú renuncie para aprobar la pena de muerte, aunque sepa perfectamente que tal decisión necesita que el Congreso la apruebe por unanimidad.

García sabe bien que no cuenta ni contará con los votos necesarios para lograr la aprobación de la pena de muerte, y la consiguiente renuncia al Pacto de San José y a la CIDH. No obstante, sabe también que levantar este punto de agenda, es bastante efectivo en tanto deslegitima las exigencias de justicia y verdad, asegurando la impunidad para la clase política y las fuerzas armadas. De paso, con mucho de demagogia alarmista, exaltar fantasma del terrorismo, mantiene distraída a la opinión pública y la aleja de temas centrales como la tan cuestionada continuidad de la política económica neoliberal.

⁶ El informe final presentado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación dio como cifras oficiales del conflicto armado interno 69280 muertos y aproximadamente 5000 desaparecidos. Sendero Luminoso fue declarado responsable del 46%, las Fuerzas Armadas y policiales del 30% y otros agentes como los Comités de Autodefensa, paramilitares o el MRTA del 24%. Véase al respecto www.cverdad.org.pe

Si de política económica se trata el segundo gobierno aprista ha limitado su agenda a un único punto: la concreción del TLC con Estados Unidos, firmado por el gobierno de Toledo pero no ratificado aún por el congreso norteamericano. Haciendo un poco de memoria, Estados Unidos pretendía negociar colectivamente la firma del TLC con Ecuador, Colombia y Perú, sin embargo la situación política de los otros dos países, dejó suspendidas sus negociaciones y llevó al Perú a una negociación por separado. El TLC firmado por Toledo el 2006, es bastante desventajoso para el Perú en puntos claves como por ejemplo la agroindustria del algodón, los precios de las medicinas o en cuestión de generación de empleo pues por la desgravación de aranceles, se perderían miles de puestos de trabajo sólo en el sector manufacturero. Desde los Estados Unidos, el TLC no cuenta con el apoyo total de los norteamericanos, menos ahora que la mayoría demócrata en el Congreso ha objetado una serie de puntos como por ejemplo los referidos a legislación laboral peruana, “flexibilizada” en demasía durante el ajuste estructural. Esto pone en desventaja a los productores norteamericanos, que deben respetar estándares laborales que incrementan los costos de producción, mientras que en el Perú los bajos salarios y malas condiciones laborales, favorecerían una competencia desleal. Como afirma la investigadora norteamericana Uno “El rechazo al ofrecimiento del ex presidente Toledo de incluir estipulaciones sobre los derechos laborales esenciales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por parte del equipo estadounidense plantea que será difícil la modificación del TLC conforme a las exigencias hechas por los demócratas en los Estados Unidos”.⁷

De acuerdo a esto, no es difícil concluir que el TLC debe ser renegociado, lo cual obviamente dilatará la ratificación que tanto apremia el presidente García. Lo mismo que la aprobación de la pena de muerte, la ratificación del TLC no es una posibilidad real pero en el corto plazo cumple el cometido de alejar la atención de otros temas políticos. Es el caso de la renegociación de contratos de privatización de las empresas públicas la década de los 90 como Telefónica, o la revisión de contratos con empresas mineras cuya baja tributación al Estado no se condice con sus altas ganancias. Es el caso también de la anunciada redistribución del “auge macroeconómico” que supuestamente debería “gotear” a las mayorías y reflejarse en mejores salarios y servicios. ¿Cuanto mas podrá sostener el gobierno aprista esta agenda cortoplazista, efectista y por lo demás prácticamente irrealizable? ¿Puede seguir gobernando sobre la continuidad de las políticas del toledismo y eludir la ejecución de políticas de largo alcance? La respuesta tiene que ver directamente con el estado actual de la oposición política.

Sillas vacías: la oposición inexistente

Es casi un lugar común hablar de la crisis de los partidos políticos en el Perú. Salvo el APRA no se puede encontrar otra organización política cohesionada, capaz de sentar posición, actuar como un cuerpo orgánico y mantener una base social leal y disciplinada. Esta crisis partidaria se refleja en la ausencia de una oposición capaz de disputar la agenda política nacional y marcar nuevos puntos prioritarios. ¿Qué ha

⁷ Uno Saika, *El TLC en manos de Dios*, Revista Argumentos N° 8, Instituto de Estudios Peruanos, Lima Diciembre 2006

pasado con las principales agrupaciones políticas contendoras del APRA en la campaña electoral?

En el caso de la Alianza Unidad Nacional (UN), formada por partidos tradicionalmente identificados de derecha como el Partido Popular Cristiano (PPC) y Renovación Nacional, su carácter meramente electoral, hacía prever que las disputas internas no tardarían en llegar. Tras la derrota de Lourdes Flores, el sector de Renovación optó por apoyar abiertamente al gobierno aprista asumiendo incluso algunos ministerios. Desde el Congreso la bancada de UN ha optado también por conferir cierto apoyo al APRA. No olvidemos que muchos de los congresistas de dicha agrupación son a su vez representantes de los principales gremios patronales y/o están vinculados a los sectores más conservadores de la iglesia católica. Ambos actores 20 años después le han perdonado prácticamente todo al APRA luego de haber sido enemigos irreconciliables. Han perdonado primero por que los salvó de Humala y segundo por que las coincidencias superan largamente sus expectativas iniciales. Unidad Nacional no es una fuerza opositora por que coincide en casi todas las líneas con el gobierno aprista, compartiendo el impulso por la aprobación de la pena de muerte, la firma del TLC y la alineación del Perú con los Estados Unidos. Tampoco la derecha puede criticar el antiguo laicismo del APRA, que llevó a que la iglesia declarara como enemigo a Haya de la Torre. La cercanía a la iglesia queda demostrada no solo en el gesto contrito de Alan García besando el anillo del cardenal Cipriani, sino en la tibia política respecto a la mujer y los derechos reproductivos. Ante tantas señales de coincidencia y buena voluntad, queda claro entonces que por derecha, el APRA por ahora no cuenta con oposición alguna.

Por izquierda al parecer tampoco el APRA tiene opositores. Tras la desaparición del frente electoral Izquierda Unida a inicios de los 90, la izquierda peruana no ha podido reconstituirse como fuerza política. Las pequeñas agrupaciones en las que se fraccionó y postularon las últimas elecciones del 2006 no alcanzaron juntas el 4% que exige la ley electoral para colocar congresistas. De cualquier forma, la opción identificada como de izquierda por las mayorías fue el Partido Nacionalista Peruano (PNP) liderado por Ollanta Humala. El PNP asumió las banderas que hoy se identifican con izquierda: crítica al modelo neoliberal, defensa de los recursos naturales, anti imperialismo. No obstante, tras perder las elecciones la fragilidad de esta agrupación política se hizo evidente. A los pocos días de haber asumido funciones la bancada congresal del PNP sufrió las primeras deserciones; el candidato a vicepresidente Torres Caro, junto a otros 4 congresistas renunciaron al PNP acusando a Humala de desviaciones radicales, sus coqueteos con el APRA hicieron adivinar un rápido realineamiento. Luego de esto devino la ruptura con Unión por el Perú (UPP) agrupación que había prestado la inscripción al partido de Humala, al no poder ponerse de acuerdo en los cupos partidarios para las elecciones municipales y regionales. El PNP quedó así con la mitad de los legisladores que originalmente colocó, perdió la mayoría y se disolvió rápidamente como fuerza opositora formal desde el Congreso. El PNP no llegó nunca a consolidarse como una propuesta sólida ideológica y orgánicamente. Su carácter coyuntural electoralista y los intereses contra puestos que agrupó, terminó por hacer saltar las divergencias y demostró que, para representar los intereses de las mayorías, hace falta mucho más que un improvisado discurso encendido.

Si la bancada del PNP no funciona coordinadamente como una fuerza opositora real, Humala como líder político también está más que ensombrecido. Para mantener vigencia en la política peruana Humala debía ganar o ganar, desde el Estado tenía margen y discrecionalidad suficiente para poder consolidar el partido, construir su base social, posicionarse como líder nacional y sumarse al bloque de izquierda andino. Pero perdió y con la derrota vino el desbande partidario, la deslegitimación desde sus mismas filas y el cuestionamiento de los movimientos sociales que lo secundaron. Humala no ha logrado ser un interlocutor válido para el movimiento cocalero ni para los frentes regionales, dos sectores importantes que en un momento lo apoyaron. El movimiento cocalero, dividido también, juega ahora un partido propio, construyendo su propia agrupación política. En suma el PNP y Ollanta Humala, aunque lo quisiera, no tiene la fuerza política formal, ni la legitimidad social ni el talento personal para ser una oposición al APRA, capaz de proponer una nueva agenda al país.

Si el APRA no tiene oposición, ¿entonces tiene aliados? No necesariamente aunque se ha especulado mucho respecto a un pacto con el Fujimorismo. Las coincidencias sin duda saltan a la vista pero esto no puede llevarnos a inferir que exista una alianza sellada y reglamentada. Hacer explícita una alianza de este tipo tendría un alto costo político para el APRA pues sobre el fujimorismo pesan todavía graves acusaciones de corrupción y la sombra de la vinculación con Vladimiro Montesinos. De lo que sí no queda duda es de las cercanías y coincidencias entre el APRA y el Fujimorismo cuya alta votación parlamentaria excedió las expectativas propias y ajenas. Las últimas elecciones generales el fujimorismo participó a través de la Alianza para el Futuro (APF) quedando electos 13 congresistas a nivel nacional⁸. Vale resaltar que el fujimorismo no se ha renovado ni mucho menos, continua siendo una camarilla familiar, neoliberal económicamente y ultra conservadora en materia social. Pero eso no le importa mucho al APRA pues el apoyo del fujimorismo a sus propuestas ha sido totalmente explícito; por ejemplo han aplaudido la propuesta aprista para retirar al Perú de la CIDH – algo que Fujimori intentó en su segundo gobierno – cosa previsible si tenemos en cuenta que Fujimori y varios de sus colaboradores cercanos tienen denuncias abiertas en esa instancia. Lo mismo en materia económica, la bancada fujimorista apoyó que no se revisen los contratos de tributación con las empresas mineras transnacionales, prefiriendo proponerles un “bono de solidaridad”. En retribución a tanta coincidencia, el gobierno aprista no ha dado un solo paso para acelerar el proceso de extradición de Fujimori, pese a las buenas relaciones que sostiene con el gobierno de Michelle Bachelet en Chile.

En suma, sin oposición política, con movimientos sociales débiles y con el “coincidente” apoyo fujimorista, Alan García tiene aire suficiente para poner la agenda que mas le acomode, continuar con sus políticas efectistas y postergar las reformas redistributivas prometidas. A diferencia de lo ocurrido en su primer gobierno, en el que la oposición al APRA fue muy dura por izquierda y por derecha, ahora el frente interno esta relativamente controlado ¿Pasa lo mismo en el frente externo?

¿Malos vecinos? o el (segundo) aislamiento peruano

⁸ Para datos electorales consultar: www.onpe.gob.pe

Situándonos en el escenario internacional parecen existir más coincidencias con la coyuntura internacional del primer gobierno aprista de la que el mismo Alan García esta dispuesto a reconocer. Esto en el sentido del predominio de determinadas posturas y corrientes ideológicas en los países de la región, frente a las cuales García se empeña en marchar a contracorriente.

Entre 1985 y 1990, el gobierno aprista mantuvo en el terreno internacional un cierto perfil "americanista" reflejado en el impulso al grupo de los no alineados y en la oposición a la política intervencionista de los Estados Unidos. No obstante, si bien en un primer momento encontró empatía con algunos líderes de la región⁹ no logró consolidar un bloque regional capaz de negociar puntos centrales de la agenda latinoamericana como el pago de la deuda externa a los organismos internacionales. La crisis inflacionaria que recorría Latinoamérica, sumada al colapso del modelo de sustitución de importaciones, llevó a la mayoría de países a adherirse al Consenso de Washington. Mientras los gobiernos de la región aceptaban las políticas de ajuste estructural, en el Perú, Alan García prefirió adoptar medidas más bien desesperadas, como la estatización la banca, el congelamiento del pago de la deuda y la devaluación monetaria. Resultado de esto no sólo fue una crisis inflacionaria de grandes porciones sino también el aislamiento del Perú del escenario internacional, siendo declarado "país inelegible" como sujeto de crédito. Los sucesivos gobiernos, tanto de Fujimori como de Toledo, recalcaron siempre lo mucho que costo reinsertar al Perú en el escenario internacional tras el aislamiento que significo la política aprista.

En este segundo gobierno aprista, paradójicamente, el panorama se pinta opuestamente similar. Es decir, la postura de Alan García va nuevamente contracorriente a los vientos que soplan en la región, solo que esta vez, los aires se orientan hacia la izquierda y no hacia el neoliberalismo como a fines de los 80. En la región y particularmente en el área andina, los países más importantes para el Perú por su repercusión social, cuentan hoy con gobiernos claramente declarados socialistas. En Bolivia Evo Morales, lidera un gobierno de plataforma indígena, cuya repercusión en la zona sur andina del Perú no es nueva, dado los vínculos estrechos entre las poblaciones aymaras asentadas a ambos lados de la frontera. La influencia del gobierno de Morales se vio reflejada en las elecciones presidenciales con el declarado apoyo a Ollanta Humala y en las elecciones regionales en el triunfo de Pablo Fuentes, candidato del partido izquierdista Patria Roja y actual presidente regional de Puno. Esta influencia boliviana en el sur andino peruano es mas importante aún si tenemos en cuenta que esta es la zona donde mayores conflictos sociales se han suscitado los últimos años, la mayoría por administración del poder local, pero también en torno al manejo de recursos naturales como la hoja de coca en las zonas de selva. No obstante, el gobierno del MAS debe pensarlo mucho antes de enemistarse con García, pues necesita del apoyo del Perú para gestionar la salida al mar pendiente en su agenda con Chile.

En el norte el proceso de movilización indígena y el reciente liderazgo de Rafael Correa también dejan sentir su influjo. El intercambio comercial con Ecuador y el flujo de trabajadores temporales hace que esta región sea también una de las más importantes. Con el proceso de dolarización en Ecuador, los

⁹ Nos referimos específicamente a Bolivia con Jaime Paz Zamora y a Argentina con Carlos Menem

jornales pagados por las plantaciones de banano se tornan más altos que los pagados en el Perú, esto alienta el flujo de trabajadores temporales peruanos de Piura y Tumbes hacia zonas fronterizas como Machala o Guayaquil. Así mismo, en la sierra norte peruana, donde la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) es un referente importante de organización dado el éxito político logrado a través del movimiento Pachacuti. Hasta ahora Correa ha preferido no enfrentarse directamente con el gobierno de García, ocupado como está con una agenda política bastante conflictiva.

A nivel mas ideológico y continental, el liderazgo de Chávez es otro punto importante de tensión para el gobierno aprista. Durante la campaña electoral, el presidente Hugo Chávez y el entonces candidato presidencial Alan García - ambas personalidades sumamente proclives al protagonismo mediático- se enfrascaron en insultos e intercambios verbales que terminaron con el retiro de los respectivos embajadores en Caracas y Lima. No obstante, una vez en el gobierno se reanudaron los lazos diplomáticos pero de manera muy tibia, por lo que las buenas relaciones con Venezuela no se vislumbran prometedoras.

Frente a este escenario adverso, el APRA apostó en primer lugar por revivir la debilitada Comunidad Andina, aunque su propuesta no ha tenido respuesta ni siquiera del presidente colombiano Álvaro Uribe, dados los escándalos internos de corrupción que afectan a su gobierno. En segundo lugar, García apostó por a abrir un juego regional propio, basado sobre todo en el apoyo de la presidenta chilena Michel Bachelet, insistiendo en mostrar gestos de cercanía, que los hicieran ver como parte de una izquierda social demócrata y responsable. Si bien Chile aceptó los gestos muy cortésmente, su posición siempre estuvo clara: ellos hace mucho tiempo juegan un partido propio y no están dispuestos a comprarse la agenda internacional aprista. Vale resaltar además que el APRA eligió el aliado internacional menos popular para las grandes mayorías peruanas, tanto por razones históricas de las que se deriva la pendiente delimitación marítima, como por la interesada exacerbación del sentimiento antichileno por el nacionalismo de Humala.

El escenario internacional entonces no se presenta auspicioso para el segundo gobierno aprista. El apoyo de Washington, que declaró al Perú aliado estratégico en la región, y la “amistad” de Chile y Colombia no le aseguran a García una acción internacional coordinada beneficiosa para el Perú y por lo tanto para su gobierno. La incidencia de las experiencias ecuatoriana y boliviana para los movimientos sociales, tiene ya implicancias importantes en el terreno nacional como referente exitoso de movilización y de organización política, lo mismo que la influencia de Chávez en términos mas bien ideológicos, coincidente con una opinión pública que en su mayoría cuestiona el modelo neoliberal. De otro lado, en el terreno de la integración económica y comercial, el Perú está quedando prácticamente aislado. Con la Comunidad Andina en crisis y las relaciones distantes con el MERCOSUR, es probable que el país quede excluido de proyectos regionales importantes tales como el gaseoducto sudamericano impulsado por Venezuela. García tampoco tiene opción de liderar un bloque regional ni de abrir un juego político propio, pues a diferencia de Chile, que ha firmado tratados de libre comercio por separado con los Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, Perú no tiene los indicadores económicos ni la estabilidad política de su

vecino.

Es difícil todavía predecir si este aislamiento que se vislumbra tendrá un final tan trágico como el de los 80, lo que sí no puede negar el gobierno aprista es que el Perú se mueve ya en un escenario internacional adverso.

A manera de epílogo provisional

Este artículo ha intentado esbozar en líneas generales lo que viene siendo este segundo gobierno aprista 20 años después de su tristemente recordado primer gobierno. El 2006, el pueblo peruano optó por el mal menor y las promesas de cambio responsable tan convincentemente esbozadas por Alan García. No obstante, en este segundo tiempo otorgado, el APRA todavía no cumple con las promesas redistributivas ni con las reformas políticas que deberían reivindicar a García y colocarlo –como el mismo afirmó- a la altura de los grandes estadistas de la patria. El APRA ha optado por la continuidad del toledismo, priorizando en su gobierno la estabilidad macroeconómica, el cumplimiento con los organismos internacionales y las empresas transnacionales. Hacia las mayorías, la agenda pública priorizada por el discurso aprista se ha centrado en puntos coyunturales poco realistas pero solventes en términos efectistas y distractivos.

García puede hacer caso omiso a sus promesas y colocar la agenda que más le convenga no solo por mérito político propio –que lo tiene- sino por la ausencia de una oposición política y social articulada. Tal situación le da aire para gobernar sobre la continuidad del modelo económico. La debilidad de Humala y su Partido Nacionalista dejan un vacío de representación para un sector importante de la población que rechaza que votó por él y hoy exige mejoras a su situación. En el mismo sentido, las organizaciones y movimientos sociales, no logran superar la protesta sectorial, negociando con el gobierno puntos cortoplazistas de poca repercusión en la arena política. Las coincidencias con Unidad Nacional y sobre todo con el fujimorismo, facilitan aún más las cosas al gobierno aprista.

Pero si el escenario nacional no es aún tan crítico, el internacional es ahora uno de los puntos que más puede debilitar al régimen. De manera similar a los 80 el APRA no puede o no quiere leer bien el contexto internacional. No sabemos si por ignorancia pero más probablemente por ensimismamiento, García no reconoce que el Perú viene quedando fuera de los procesos de integración regional que impulsan los países vecinos y no tiene la fuerza de Brasil o Chile para liderar un bloque o jugar un partido propio. Con la CAN en fase crítica y un apoyo moral de los EE.UU que en la práctica no es garantía de nada. El Perú corre serios riesgos de quedar aislado, y ese puede ser uno de sus principales flancos de este segundo gobierno aprista.

¿Cuánto más oxígeno tendrá García para gobernar sin implementar sus voceadas reformas sociales, por las que pedía que se le recuerde y no por sus ímpetus juveniles de los 80? Es difícil por ahora arriesgarse a esbozar una respuesta. El historiador peruano Jorge Basadre decía que el Perú oscilaba entre la parálisis y la epilepsia; momentos históricos en los cuales las crisis sociales y políticas se reflejan en una inercia

desmedida, momentos en que la violencia estalla con toda su barbarie dejando ver los enormes abismos que separan la sociedad peruana. La aparente calma de la que goza García para gobernar en el frente interno no significa que no existan tensiones que resolver. Los índices de pobreza siguen siendo de los más altos en la región, los niveles de desigualdad se han incrementado y las fracturas étnicas siguen siendo ensanchadas, por ejemplo al no otorgarse justicia a las y los afectados por la violencia política. Dar la espalda a importantes sectores de la población y concentrarse en la estabilidad macroeconómica, puede resultar hoy oportuno para García pero no va a asegurarle mayor gobernabilidad, mejor desarrollo social y más institucionalización democrática. Veinte años entonces pueden ser demasiado para un país cuyos problemas necesitan ser resueltos ahora por el gobierno y la clase política y no pueden seguir siendo postergadas para el largo plazo. De continuar obviando esta realidad, no sería raro que más temprano que tarde, volvamos a gravitar el viejo péndulo de exclusión y violencia.